

Descarrilados

MANOLO E. VELA
CASTAÑEDA



MANOLOVELA@IBEROMX

¿En qué momento se descarriló el proceso de democratización? De las expectativas de 1996 y 1997 tan solo quedan fotos viejas, o la añoranza de los estúpidos: que todo tiempo pasado fue mejor. En definitiva: no fuimos capaces de aprovechar aquella coyuntura, y ese momento se cerró. Lo peor de todo es que ese tipo de oportunidades políticas no pasan tan seguido en la historia de un país.

Pero nuestras fallas –persistentes como son– ya estaban allí, desde aquellos “dorados años” de 1996 y 1997.

La política. De 1986 en adelante los partidos políticos en Guatemala exhibieron una característica que la coyuntura de 1996-7 no iba a modificar: su alta volatilidad.¹ Partido que hace Gobierno, partido que está condenado a desaparecer. De forma constante, aquí las preferencias electorales se hayan en proceso de reconstitución en torno, no a identidades partidarias, sino más bien –como lo apuntara Edelberto Torres-Rivas– a una percepción de lo oligárquico y de lo antioligárquico.

Lo que sí no estaba en el guion de 1996 era que la clase política iba a entrar en un oscuro tobogán de degradación moral. Además de esto, la lógica que ha terminado por imponerse ha sido que los institutos partidarios se ponen de rodillas ante cacicazgos departamentales que controlan poderosas redes de clientelismo, en las que se articulan constructoras privadas y otros agentes políticos y económicos. A ello ha coadyuvado la no limitación de la reelección de alcaldes y diputados, una constante del diseño institucional de los años ochenta.

La economía y la sociedad. Los niveles de crecimiento de la economía nunca llegaron a las metas previstas en los acuerdos de paz –del seis por ciento. Desde 1990 la economía guatemalteca se ha mantenido en un ritmo de crecimiento por debajo del cuatro por ciento (excepto 1998 y 2006-7). Esos tres puntos porcentuales de crecimiento anual no sirven para aminorar los graves desequilibrios sociales. Combinado a ello, la meta tributaria –la tasa de recaudación del 12 por ciento en relación a lo que el país produce en un año (lo que los economistas lla-



ILUSTRACIÓN VÍCTOR MATAMOROS > EL PERIÓDICO

man el Producto Interno Bruto, PIB)–, a pesar que fue alcanzada en 2007, en los años siguientes retrocedió. La conclusión aquí –cuando analizamos economía y sociedad– es que tenemos un Estado sin recursos para afrontar las graves desigualdades sociales.

La seguridad y la justicia. El “nuevo” cuerpo policial, la Policía Nacional Civil, fue parte del pacto de 1996-7. En aquel momento se colocaron las piedras fundacionales de una Policía que siguió siendo corrupta, ineficaz y que se hallaba sin recursos. El auge de la violencia criminal solo vino a poner de manifiesto que la Policía no funcionaba. Y así, entre 1996 y 2009 se duplicó el número de homicidios, pasando de 3 mil 619, a 6 mil 498. Pero además, se produjo aquí un fenómeno que nadie pudo prever: el auge de los carteles de la droga mexicanos. Todo empezó hacia 2001, cuando a través de una serie de operaciones, Estados Unidos logró cerrar el corredor del Caribe a los carteles colombianos. Esto trajo más poder y más dinero a los carteles colombianos, y ello, sumado a la convivencia

con un nuevo socio político –el PAN (Partido de Acción Nacional), que había ganado la elección en 2000– abrió la brecha para el inicio de cruentas batallas entre liderazgos mafiosos, por territorios y vías de transporte. Esto fue lo que alcanzó a Guatemala, una región a la que todos los corredores del tráfico de drogas llegan. Esta tendencia no solo ha apuntalado la violencia criminal, sino que también ha hecho mella en la independencia judicial. En torno a esto último cabe destacar que la reforma judicial se cortó abruptamente con el resultado negativo que tuvo –en la consulta popular de mayo de 1999– el proyecto de reformas a la Constitución.

Conclusión. La forma como estos factores –la política, la economía y la sociedad, y la seguridad y la justicia– se entremezclan es lo que define nuestro tiempo. Estamos frente a poderosos círculos viciosos: una clase política que se siente cómoda comportándose de forma indecente, una economía que no da para emprender políticas sociales redistributivas, y un escena-

rio de criminalidad organizada, que propicia más y más impunidad, lo que –al mismo tiempo– coincide con la cultura de corrupción enraizada en las elites políticas.

La salida de estos círculos viciosos vendrá de la política. De una nueva generación de líderes, que esté en condiciones de forjar otro momento de oportunidad para dignificar la política, hacer los cambios que se precisan en la economía, y hacer frente a la criminalidad y a la impunidad, a través de reformas institucionales.

El reto para los demócratas hoy en Guatemala es encarrilar de nuevo –muy a pesar de las mafias de todo tipo– el proceso de democratización.

1. Esta, que no es una característica exclusiva del sistema de partidos guatemalteco, ha sido estudiada por S. Mainwaring y E. Zoco, “Political Sequences and the Stabilization of Inter-party Competition: Electoral Volatility in Old and New Democracies”, *Party Politics*, March 2007, Vol. 13, No. 2: 155-78.